

DERECHO A LA IDENTIDAD: LA NECESIDAD DE UNA LEY ESPECIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por Gabriel A Rolandi

I Introducción.

En un trabajo anterior, advertimos la existencia de una ausencia de tutela del derecho fundamental a la identidad –derecho de tercera generación- a partir de la concurrencia de la vulnerabilidad que implica la imposibilidad de acceder a distintos beneficios asistenciales.

En efecto, señalamos que el decreto 222/18, que permite a los mayores de edad, pertenecientes a pueblos originarios, tramitar directamente en sede administrativa –es decir, sin judicializar la petición- la obtención del documento que acredite la identidad.

En dicha oportunidad, analizamos también que la expedición del documento nacional de identidad es consecuencia directa de la inscripción realizada en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cuestión que, destacamos, se encuentra regida principalmente por la ley 26.413.

Sin embargo, planteamos una serie de interrogantes vinculados a cuál o cuáles serían las herramientas más idóneas para poder salvaguardar el derecho a la identidad, teniendo en cuenta la naturaleza local que detentan los Registros Civiles y las normas nacionales que resultan aplicables.

Nos preguntábamos así, si existe o no una potestad normativa local que permita resguardar adecuadamente la omisión incurrida por la norma nacional; en tal sentido, si era el Registro Civil, mediante una disposición del Director General quien podía hacerlo, o bien si resulta necesario una norma local de jerarquía superior.

Es pues, el objetivo del siguiente estudio determinar dos aspectos: a) si puede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regular lo atinente a la

inscripción –cuya consecuencia es la emisión del documento nacional- y; b) en caso afirmativo, cuál sería el órgano local competente para resolver la cuestión.

En tal sentido, resultará necesario abordar el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, de cara al régimen establecido por la Constitución Nacional, su rol en el concierto federal y, por otra parte, cuáles son las atribuciones o competencias que tienen sus órganos de cara a resolver la cuestión en estudio.

II. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su facultad de legislar en materia de derecho público local

El análisis de la cuestión propuesta en el título, nos permitirá concluir en la existencia o no de atribuciones por parte de la Ciudad de Buenos Aires para poder decidir, por sí, extender los beneficios acordados por el decreto 222/18. Ello nos obliga a determinar, previamente, cuál es el estatus jurídico que tiene la Ciudad en el concierto federal, de acuerdo al régimen previsto por el constituyente nacional.

Tal como lo dispone el art. 129 de la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires posee un régimen de gobierno autónomo y, en consecuencia, es titular de facultades legislativas y jurisdiccionales propias.

Por su parte, la doctrina se encuentra controvertida acerca de los alcances que cabe atribuir a la referida autonomía, discutiéndose cuál es la naturaleza jurídica que, a partir del art. 129, detenta la Ciudad.

Así, Bidart Campos considera que la Ciudad es un *sujeto* de la relación federal, postura que, con matices, también es sostenida por Cassagne quien le reconoce un status jurídico especial dentro de la relación federal. Por su parte, Rosatti, la define como una Ciudad constitucional federal; Marienhoff, estima que la Ciudad es sólo un ente autárquico con amplias competencias, por cuanto considera que sólo las provincias son autónomas. Para Barra, la Ciudad es un municipio que sólo tiene un gobierno autónomo. Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido que la Ciudad ostenta, a partir de la reforma de la Ley Suprema, un status constitucional especial.¹

En mi opinión, a partir de la reforma constitucional, la Ciudad de Buenos Aires, si bien no es una provincia, tiene muchas de sus características que permiten descartar su naturaleza de ente autárquico. Su representación en el

¹ CSJN, 29-3-1997, "Gauna, Juan Octavio s/acto comicial"

Senado, su rol en la ley de coparticipación federal de impuestos, etc., favorecen tal interpretación.

No se me escapa, por cierto, que el constituyente nacional no se refirió estrictamente a una ciudad “autónoma”, sino que tendrá un régimen de gobierno autónomo, con amplias facultades de legislación. En este punto, también, se encuentra asimilada a las provincias.

Por ello, de acuerdo a la forma en que la Ley Fundamental ha distribuido las competencias gubernamentales entre el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires, legislar en materia de derecho público constituye una potestad de naturaleza eminentemente local.

Así también lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicando que las cuestiones de derecho público son expresa competencia de las autoridades locales.² Ello es así porque, a criterio de la Corte, sólo de esa forma *“encuentra tutela el efectivo ejercicio de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por el artículo 129 de la Constitución Nacional (texto 1994), disposición que le reconoce facultades exclusivas y excluyentes de autodeterminación, autoadministración y autoorganización”*.³

No cabe duda, pues, que el derecho público (no penal) es uno de los ejes de las soberanías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada provincia tiene la competencia para dictar su propia Constitución y, con arreglo a ella, reglar los diversos capítulos del derecho público local, entre ellos los que componen el derecho administrativo y el derecho financiero. Así, es competencia local configurar los diferentes institutos de dichas ramas jurídicas, entre ellos, actos y contratos administrativos, el procedimiento administrativo, el sistema de los recursos administrativos, la expropiación, el

² CSJN, “Niella, Reinaldo c/GCBA s/Acción declarativa”, causa Nº 368 XXXV, sentencia del 24-10-2000.

³ Sin embargo, como veremos más adelante, la cuestión relativa a la prescripción no integraría, según el Máximo Tribunal, una materia sobre la cual puedan regular las provincias o la Ciudad de Buenos Aires

poder de policía, el sistema tributario, la administración financiera, la responsabilidad del Estado local y, además, el régimen registral.⁴

En efecto, la ley 26.413 establece, en lo que aquí interesa, que “El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...” (art. 2).

En función de ello, cabe concluir que las facultades propias de legislación reconocidas en el art. 129 de la Constitución Nacional, aunado a lo establecido por el art 2 de la ley 26.413 permiten que la Ciudad de Buenos Aires regule lo atinente a las inscripciones registrales, en tanto ello traduce el ejercicio práctico y concreto de su naturaleza autónoma.

Despejado así el interrogante acerca de la facultad de legislación de la Ciudad, resta analizar ahora los distintos aspectos concretos que se derivan de tal afirmación. Básicamente, la cuestión se vincula con los límites al ejercicio de la facultad legislativa propia y el alcance de las legislaciones nacionales aplicables.

Asimilada a una provincia, la cuestión remite al análisis de las normas constitucionales que están en juego. En efecto, un adecuado marco para resolver el tema lo proveen los arts. 121 y 126 de la Carta Magna.

Así, el art. 121 dispone que *“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”*. A su turno, el art. 126 establece que *“Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya*

⁴ Así, por ejemplo, el decreto 1510/97 (ratificado por la Legislatura de la Ciudad), regula el procedimiento administrativo; la ley 238, el régimen de expropiación, y el Código Fiscal (-t.o. 2004- por decreto nº 882-GCBA-04.

sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.”

Como advierte Gelli, todo sistema federal supone la existencia de dos órdenes de poder territorial entre los que se distribuyen atribuciones los estados federados y el Estado central. En esa dirección, el art. 121 sienta un principio propio de aquel sistema en virtud del cual los poderes delegados por los entes locales en el gobierno federal están taxativamente enunciados en la Constitución. En consecuencia, esas atribuciones delegadas constituyen competencias de excepción, amplias, pero no por eso menos excepcionales.⁵⁵

También la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha receptado el principio de las facultades no delegadas. Así, el art.1 de la Constitución local dispone que *“La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. **La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal...**”*.

Sin embargo, dado que el art. 121 está expresado en términos muy generales, la distribución de atribuciones entre el Estado Federal y los estados locales también emerge de varias normas de la Constitución Nacional. Así, los arts. 5, 75 inc. 12, 122 y 129. También, de la propia Carta Magna surgen competencias concurrentes que generan dificultades en la delimitación del ejercicio de las atribuciones respectivas por parte de los entes locales y el gobierno central. No obstante, ello se ha manifestado tradicionalmente en el ejercicio del poder de policía en materia de seguridad, salubridad y moralidad

⁵⁵ Gelli, María Angélica, *Constitución de la Nación Argentina*, cit. P. 743.

(vgr., los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos: “Varios Puesteros”, “Empresa Plaza de Toros”, “Saladeristas de Podestá”) o bien, en un concepto más amplio, en la protección de los intereses económicos (vgr., los fallos “Cine Callao”, o “Ercolano c. Lanteri de Renshaw”).

No parecería que el ejercicio de la autonomía local en materia de registración de los hechos vitales ocurridos en el territorio de cada uno de los entes locales implique, de suyo, un conflicto con la ley nacional.

Ello es así, además, en tanto el propio art. 2 de la ley 26.413 determina que *“El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”*

Ahora bien, resulta menester determinar, aún en este contexto, cuál es el miraje o el criterio con el cual deben desenvolverse estas competencias concurrentes. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que: *“Conforme a los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse..”*⁶

Por consiguiente, la labor de las autoridades locales (veremos luego cuál de ellas resulta pertinente) consiste en regular armonizando sus disposiciones con la normativa nacional, a fin de asegurar lo que la Corte ha denominado un desenvolvimiento armonioso.

⁶ Ver, CSJN, 3/11/2015, “PAPEL PRENSA S.A. c/ ESTADO NACIONAL(BUENOS AIRES PCIA. CITADA 3°) Y OTRO s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”, Fallos: 338:1183

En este cometido, y en punto concreto con la labor del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el Máximo Tribunal de la Nación hay señalado que “el carácter local de los registros públicos del estado civil de las personas -sea que provenga de lo dispuesto por el Código Civil o por la Constitución Nacional- no debe alterar la uniformidad de la legislación común y la misión armonizadora de sus normas básicas.”⁷

En función de ello, ninguna duda cabe de que la organización del Registro Civil es atribución local y su organización corresponde, por mandato constitucional y por así preverlo la ley nacional, a las autoridades locales. Sin embargo, en dicho cometido, debe procurar respetar el estándar establecido por la ley 26.413 y por el resto de las normas nacionales. Sólo así puede garantizarse la coexistencia armónica de ambos órdenes normativos.

De todas maneras, tal estándar no resulta vulnerado si las autoridades locales deciden regular un supuesto no contemplado por la norma nacional en tanto, en ese punto, se activa la autonomía local, en punto a las facultades legislativas propias.

Así, los beneficios establecidos por el decreto 222/18 a favor de las personas pertenecientes a pueblos originarios, podrían extenderse a otros grupos que, a criterio de la autoridad local, revistan condiciones similares; no obstante, también debieran respetar la singularidad del caso que justificó la excepción contenida en el régimen nacional.

Incluso, las propias normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires aseguran a los vecinos de la Ciudad, su propio estándar a partir del cual se desenvuelve el juego armónico de los derechos individuales.

En efecto, son numerosas las normas contenidas en la Carta Magna local que se manifiestan en ese sentido; así, por ejemplo, resulta sumamente ilustrativo el mandato conferido en el art. 11. Allí se establece que *“Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.”*

⁷ Ver, CSJN, Jansa de Pensel, María Teresa. Fallos: 215:319

*Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. **La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.***”

Esta última parte del art. 11 (en destacado, no original) resulta de suma trascendencia para el tema que nos ocupa. En efecto, existe un mandato por parte del constituyente local a fin de que se remuevan todos los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la igualdad, impidiendo –entre otras– la efectiva participación en la vida social de la comunidad.

Quiere ello decir que, de advertir la existencia de algunos de estos impedimentos, las autoridades locales tienen el deber de removerlo a fin de asegurar el pleno goce de los derechos sociales.

En ese sentido, y tal como se apuntara en un trabajo anterior, el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, en tanto es la piedra basal del resto de los derechos que de él se derivan. Es pues, un derecho que sólo cuando es debidamente satisfecho permite asegurar el cumplimiento de otros derechos también fundamentales.

Así también lo reconoce la propia Constitución de la Ciudad en el art. 12 donde expresamente garantiza el derecho a la identidad, el que debe satisfacerse de manera inmediata.⁸

⁸ El art. 12, en lo pertinente, establece: “La Ciudad garantiza: El derecho a la identidad de las personas. Asegura su identificación en forma inmediata a su nacimiento...”

De esta manera, de advertirse que una norma nacional, al asegurar un beneficio a un sector por considerarlo vulnerable, ha dejado fuera de protección a otro sector que cumple en igual manera las condiciones de vulnerabilidad tenidas en cuenta por la autoridad nacional para acordar el mentado beneficio, es deber de las autoridades locales emplear todas las herramientas que el sistema de derechos le reconoce a fin de asegurar el pleno desarrollo de la persona humana.

En este cometido, habrá de resolver, sin embargo, si ello corresponde a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o al Poder Ejecutivo y, en este último caso, si requiere de un decreto emanado del Jefe de Gobierno, o de una resolución o disposición de sus órganos inferiores.

III. Las atribuciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Las facultades que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires reconoce a la Legislatura local, se encuentran contenidas en los arts. 80 a 91. Entre ellas, y en lo que aquí interesa, se prevé que resulta atribución de la Legislatura:

- inc. 1) Dictar leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la presente y tomar todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades;
- inc. 2. Legislar en materia:
 - o a) Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de bienes públicos, comunal y de descentralización política y administrativa.
 - o j) En toda otra materia de competencia de la Ciudad.
 - 7. Legisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; niñez, adolescencia,

juventud, sobre personas mayores y con necesidades especiales.

- **25. Regula la organización y funcionamiento de los registros:** de la Propiedad Inmueble, de Personas Jurídicas **y del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad** y todo otro que corresponda.

Como se observa, de las atribuciones arriba transcriptas surge claramente la facultad de la Legislatura local para poder extender los beneficios contenidos en el decreto 222/18 para todas aquellas personas que se encuentren en la situación de vulnerabilidad que significa no estar identificado.

Ello quiere decir que, sea a través de una ley que regule el funcionamiento del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el ámbito de la Ciudad, o bien, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad –cuya tutela también la Constitución de la Ciudad consagra expresamente- la Legislatura cuenta con sobradas atribuciones para zanjar la cuestión.

No se escapa, sin embargo, que el trámite parlamentario exige la búsqueda de consensos que, en algunos casos –y en el supuesto bajo estudio, mucho más- requieren de un proceso de negociación que insume un tiempo que conspira contra la satisfacción inmediata del derecho insatisfecho.

Valga aquí recordar que cada día que pasa para una persona sin identificarse es un día más que esa persona carece de un derecho esencial básico y elemental que, como se expresara, tiene a su vez una naturaleza instrumental a fin de poder salvaguardar otros derechos también fundamentales.

Resulta pues, necesario, analizar otras alternativas que resuelvan la cuestión, pero en el tiempo que ello resulta necesario.

IV. Las atribuciones del Poder Ejecutivo local

En razón de lo expresado precedentemente, si puede la Legislatura dictar una ley que extienda los beneficios contenidos en el decreto 222/18, también puede hacerlo el Ejecutivo si, por ejemplo, acude a la herramienta contenida en el art 103 de la Constitución de la Ciudad. Allí se establece, la posibilidad de dictar los denominados decretos de necesidad y urgencia.

Dice la norma en cuestión, en lo que aquí interesa, que: *“El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el Gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia...”*.

Va de suyo que la naturaleza excepcional que caracteriza a este instituto, alienta la desconfianza en la mirada como opción posible. Sin embargo, cabría preguntar si el tiempo que implica el tratamiento de una norma que extienda los beneficios contenidos en el decreto 222/18 no alcanza a configurar una circunstancia excepcional; máxime, no tratándose de las materias que el constituyente local ha excluido expresamente de esta figura.

Por otra parte, y dado el sistema de refrendo que la Constitución de la Ciudad ha previsto para la ratificación de este instrumento⁹ –donde la falta de aprobación de la Legislatura en el plazo previsto, determina la pérdida de vigencia del decreto de necesidad y urgencia- podría implicar, en la práctica, un inconveniente aún mayor que la falta de consensos.

⁹ Art. 91: “Debe ratificar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días de su remisión. Si a los veinte días de su envío por el Poder Ejecutivo no tienen despacho de Comisión, deben incorporarse al orden del día inmediato siguiente para su tratamiento. **Pierden vigencia los decretos no ratificados.** En caso de receso, la Legislatura se reúne en sesión extraordinaria por convocatoria del Poder Ejecutivo o se autoconvoca, en el término de diez días corridos a partir de la recepción del decreto.” (énfasis agregado)

En efecto, no impresiona como una solución razonable la vigencia temporal de una norma que garantice el derecho a la identidad, pero sólo de manera precaria y, posiblemente, durante un período de tiempo acotado.

Habrá de analizar, en consecuencia, el resto de las atribuciones del Poder Ejecutivo a fin de establecer si el Jefe de Gobierno puede, por sí, dictar una norma que resuelva la cuestión bajo examen.

Así, las atribuciones del Ejecutivo se encuentran previstas –en lo que aquí interesa- en los arts. 102, 104 y 105 de la Constitución de la Ciudad.

Estas normas disponen, en lo sustancial, que: *“El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las normas...”* (art. 102). Tiene como atribución Adoptar medidas que garanticen la efectiva igualdad entre varones y mujeres en todas las áreas, niveles jerárquicos y organismos (art. 104, inc. 28), y como deber *“Hacer cumplir, como agente natural del Gobierno Federal, la Constitución y las leyes nacionales...”* (art. 105, inc. 12).

Del juego armónico de las normas mencionadas, sumado al plexo dogmático de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, surge, a nuestro entender de manera clara, la atribución del Jefe de Gobierno de resolver la cuestión a través de un decreto reglamentario.

¿Podría el Director General del Registro del Estado y Civil y Capacidad de las Personas, como órgano integrante de la Administración Central de la Ciudad, emitir una disposición extendiendo los beneficios del mentado decreto 222/18?

Entendemos que ello si bien es posible, no resulta aconsejable.

En efecto, la ausencia de una ley local que regule la actuación del Registro Civil de la Ciudad, determina que la actuación de este órgano se encuentre principalmente regulada por la ley nacional 26.413.

No obstante, si existiera un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura con el objeto de que se regule, mediante una ley

local la actuación del Registro Civil de la Ciudad, la respuesta podría ser diferente.

En efecto, la intención del Poder Ejecutivo puesta en evidencia a partir del envío de un proyecto de ley a la Legislatura, permitiría que los órganos subordinados, -haciendo pié en la conducta de quien tiene a su cargo la “administración de la Ciudad”- ejerzan sus competencias de manera armónica con la cumplida por la cabeza de la administración local; ello, sin perjuicio del oportuno tratamiento del proyecto por el órgano parlamentario.

V. Conclusiones

A lo largo de este breve ensayo se han analizado algunos aspectos vinculados con el derecho a la identidad, en particular, aquellos referidos a la potestad de su regulación por parte de la Ciudad.

En ese sentido, y luego de referir la naturaleza jurídica de la ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se analizó las relaciones que se establecen entre los entes locales y el Estado central en el concierto del sistema federal.

Precisamente, y a partir del rol que le cabe a la Ciudad y de las obligaciones que a ella corresponden por mandato del constituyente local, se concluyó en la existencia de un mandato expreso contenido en la Carta Magna local a fin de que las autoridades locales garanticen la plena vigencia del derecho a la identidad.

En función de ello, y analizadas las atribuciones de la Legislatura y del Jefe de Gobierno, se advirtió que no hay óbice alguno para que ambos poderes dicten normas –cada uno en el ámbito de su competencia- con miras a salvaguardar el mentado derecho fundamental.

De todas maneras, la falta de una ley local que regule la actuación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el ámbito de la Ciudad determina que las competencias de este organismos se encuentren

principalmente definidas por una norma nacional que, sobre el punto, cabe entender de manera restringida; es decir, limitadas a aquellas que se encuentran previstas en la ley 26.413.

No obstante ello, el sólo envío de un proyecto de ley a la Legislatura que regule la actuación del Registro Civil –y en la que se prevean competencias suficientes- permitiría a este organismo dictar una disposición que, sin perjuicio de la oportuna sanción de la ley específica, resuelva en lo inmediato los casos en los que se configure la situación de vulnerabilidad a la que alude el decreto 222/18, aún sin pertenecer al colectivo al que se limita esta norma nacional.